

Hispania Sacra, LIX  
119, enero-junio 2007, 243-268, ISSN: 0018-215-X

## «CHE SI RIDUCA AL MODO DI PROCEDERE DI CASTIGLIA». EL DEBATE SOBRE EL PROCEDIMIENTO INQUISITORIAL PORTUGUÉS EN TIEMPOS DE LOS AUSTRIAS\*

POR

ANA ISABEL LÓPEZ-SALAZAR CODES

*Becaria F.P.U. (U.C.L.M.)*

### RESUMEN

Durante la Unión Dinástica los *cristãos-novos* portugueses y sus valedores elevaron constantes súplicas los monarcas católicos y a los sumos pontífices para que reformasen el modo de proceder de la Inquisición portuguesa. Por encima de los aspectos concretos, los *cristãos-novos* trataron de conseguir que se introdujese en Portugal el procedimiento de la Inquisición española. La controversia quedó, en gran medida, centrada en la validez de los testigos singulares para probar el crimen de herejía. Por su parte, el Santo Oficio luso pugnó, durante los sesenta años, para mantener su autonomía y jurisdicción frente a las intromisiones de la Corona o de la Santa Sede.

**PALABRAS CLAVE:** Portugal, Unión Dinástica, Austrias, Inquisición, Cristãos-novos, Procedimiento inquisitorial.

### ABSTRACT

At the time of the Dynastic Union the Portuguese *cristãos-novos* and his supporter send constant petitions to the Catholics Monarchs and at the Holy

---

\* En el presente escrito hemos utilizado las siguientes abreviaturas: ANTT (Arquivo Nacional da Torre do Tombo); CGSO (Conselho Geral do Santo Ofício); AHN (Archivo Histórico Nacional); BNL (Biblioteca Nacional de Lisboa); AGS (Archivo General de Simancas); ASV (Archivio Segreto Vaticano). Este artículo tiene su origen en la conferencia pronunciada en el curso de verano *La Inquisición española*, dirigido por los profesores Martínez Millán y López Vela, a los que agradezco su invitación y sugerencias. Asimismo, deseo hacer extensivo mi agradecimiento al profesor Rafael Valladares del Instituto de Historia, CSIC, director de mi tesis doctoral.

Father to obtain the reformation of the behaviour of the Portuguese Inquisition. Beyond of the concrete aspects, the *cristãos-novos* search to obtaining the introduction in Portugal the proceedings of the Spanish Inquisition. A great deal of the controversy remains balanced at the validity of the singular witness for the crime of heresy. For is part, the Portuguese Holy Office fight, for the sixty years, to maintain his autonomy and jurisdiction to the intromissions of the Crown and the Holy Siege.

**KEY WORDS:** Portugal, Dynastic Union, Habsburg, Inquisition, *cristãos-novos*, Inquisitorial proceeding.

Recibido/Received 17-06-2006

Aceptado/Accepted 29-07-2006

## LA OTRA INQUISICIÓN IBÉRICA

Es muy poco lo que se acostumbra a estudiar en España la historia de Portugal, error tanto más grave si se tiene en cuenta que, durante sesenta años centrales de nuestra historia moderna, desde el cenit del poder de Felipe II hasta el mítico año de 1640, ambos reinos formaron parte de la Monarquía Hispánica. Pero, por encima de este episodio, realmente sobresaliente, de historia política, las relaciones, presididas por el entendimiento o el recelo, se mantuvieron muy estrechas durante todos los tiempos modernos<sup>1</sup>.

Para el problema concreto que nos ocupa, el de la Inquisición, la necesidad de mirar hacia occidente se impone si queremos lograr una perspectiva más amplia sobre esta institución tan específicamente ibérica. Ello es así porque, si bien las diferencias y similitudes entre la Inquisición establecida en tiempos de los Reyes Católicos y las inquisiciones medievales o el Santo Oficio romano han sido valoradas por la historiografía, el análisis comparado de dicha institución con su homóloga portuguesa apenas ha suscitado interés de los historiadores españoles. En cambio, los portugueses, más atentos a lo que ocurre en el resto de la Península, sí han dedicado sus esfuerzos a estudiar, de manera comparativa, ambas instituciones<sup>2</sup>.

Por otra parte, desde el momento mismo de su establecimiento, la Inquisición portuguesa, como una hermana menor, miró a la española, ya consolidada por entonces, y la convirtió en su modelo de organización. Pero, además, los monarcas de

<sup>1</sup> Rafael VALLADARES, «Portugal hispánico, siglos XVI-XVII. Introducción», *Hispania*, LXIV/1, 216 (2004), p. 9. Cfr. Jean-Frédéric SCHAUB, *Portugal na Monarquia Hispânica (1580-1640)*, Lisboa, Livros Horizonte, 2001. Ana Isabel BUESCU, «Aspectos do bilinguismo português-castelhano na época moderna», *Hispania*, LXIV/1, 216 (2004), pp. 13-38.

<sup>2</sup> Este interés comparativo entre las distintas inquisiciones ha dado lugar al magnífico estudio de Francisco BETHENCOURT, *La Inquisición en la época moderna. España, Portugal e Italia, siglos XV-XIX*, Madrid, Akal, 1994 [ed. orig. Lisboa, 1989].

la casa de Avis pretendieron establecer en Portugal un Santo Oficio semejante al que sus cuñados tenían en España, es decir, igualmente dependiente de la autoridad real y, al mismo tiempo, autónomo con respecto a Roma. Este proyecto de introducir en Portugal el modelo inquisitorial español suscitó una fortísima oposición por parte de los *cristãos-novos*. Años más tarde, por el contrario, la propia *gente da nação* lucharía con ahínco para tratar de conseguir, en el seno de la Unión Dinástica inaugurada en 1580, que la Inquisición portuguesa siguiese la forma de proceder de la española. Quizás no se trató tanto de una contradicción, como del fruto de los cambios por los que atravesaron ambas instituciones y de las diferentes tácticas empleadas por los perseguidos para aliviar, cuanto fuere posible, el peso que podía recaer sobre ellos. A este cambio de perspectiva a la hora de comparar el Santo Oficio portugués con su homólogo español consagraremos el presente trabajo.

#### LA INQUISICIÓN PORTUGUESA: DE SUS ORÍGENES A LA UNIÓN DINÁSTICA

Tradicionalmente se ha considerado que los Reyes Católicos desempeñaron un papel fundamental en la expulsión de los judíos de Portugal, gran parte de los cuales procedían de España y se habían refugiado en el reino vecino tras el decreto de 1492. Al parecer, don Manuel o *Venturoso*, que había subido al trono en 1495, adquirió con los Reyes Católicos, en virtud de su matrimonio con la infanta Isabel, dos compromisos: el de apoyarles en su política contra Francia y el de expulsar a los judíos de su reino. Fuera por decisión propia, presionado por los padres de su esposa, o, simplemente, siguiendo su ejemplo, lo cierto es que don Manuel ordenó, en diciembre de 1496, la expulsión de todos los musulmanes y judíos que decidieran permanecer en su fe<sup>3</sup>. Meses más tarde, mediante provisión del 30 de mayo de 1497, el rey ordenaba que, durante los próximos veinte años, los neófitos no fuesen perseguidos por motivos religiosos; que, pasado dicho plazo, se siguiesen las normas del proceso civil en las causas de herejía judaizante y, por último, que, en caso de que el reo fuese condenado a confiscación, sus bienes recayesen en sus herederos. Años después, en 1522, estas concesiones fueron confirmadas por el nuevo rey don João III. Sin embargo, en 1531, el monarca encargaba a su embajador en Roma que solicitase a Clemente VII el establecimiento en Portugal de una Inquisición semejante a la española.

No vamos exponer aquí pormenorizadamente las vicisitudes por las que pasó la negociación en Roma que se extendió desde diciembre de 1531, cuando

---

<sup>3</sup> Giuseppe MARCOCCI, ««per capillos adductos ad pillam» Il battesimo forzato degli ebrei in Portogallo (1496-1497) e la discussione cinquecentesca intorno alla sua validità», en Adriano PROSPERI, *Salvezza delle anime disciplina dei corpi. Un seminario sulla storia del battesimo*, Pisa, Edizioni della Normale, 2006, pp. 339-424.

Clemente VII nombró el primer inquisidor general portugués mediante la bula *Cum ad nihil magis*, hasta 1547 cuando Paulo III concedió al Santo Oficio todos los poderes que deseaba don João III, pasando por la bula del 23 de mayo de 1536 que establecía la Inquisición en Portugal<sup>4</sup>. Nos vamos a centrar únicamente en un aspecto concreto de las negociaciones que, a nuestro entender, resulta de interés. Las sucesivas peticiones de don João a los pontífices revelan que el modelo de Santo Oficio que deseaba introducir en Portugal era el de la vecina España. Por el contrario, la reorganización del Santo Oficio papal en 1542 no ejerció apenas influencia en este proceso.

Desde el comienzo de las negociaciones, don João pidió al papa que se estableciese en Portugal una Inquisición semejante a la española<sup>5</sup>. Pero el proceso, por el que la Inquisición portuguesa logró adquirir las mismas prerrogativas y, sobre todo, la misma independencia con respecto a Roma que su homóloga, resultó lento y dificultoso debido a la oposición ejercida por los *cristãos-novos* y sus valedores en la Santa Sede. Así, la bula del 23 de mayo de 1536 establecía que, en los primeros tres años, se seguiría en las causas de herejía el procedimiento civil y que durante diez años los condenados permanecerían exentos de la pena de confiscación. Asimismo, los inquisidores deberían revelar a los reos, salvo si éstos eran personas poderosas, los nombres de quienes habían testificado contra ellos<sup>6</sup>. Tres años más tarde, el papa concedía amplias garantías a los *cristãos-novos* presos por la Inquisición mediante la bula *Pastoris aeterni* del 12 de octubre de 1539, que, sin embargo, nunca se publicó en Portugal<sup>7</sup>. Pero los *cristãos-novos* siguieron presionando en Roma para conseguir el amparo del pontífice. Éste expidió, el 22 de septiembre de 1544, el breve *Cum nuper dilectum* por el que suspendía la resolución de todos los procesos inquisitoriales hasta que el nuevo nuncio Giovanni Ricci Montepulciano llegase a Portugal e informara sobre el proceder de los inquisidores<sup>8</sup>. Las restricciones establecidas en las bulas pontificias y la constante amenaza de la intervención de los sucesivos nuncios en Lisboa en los asuntos inquisitoriales suscitaron una fuerte opo-

<sup>4</sup> Aún hoy continúa sin superarse la magna obra de Alexandre HERCULANO, *História da origem e estabelecimento da Inquisição em Portugal*, publicada, por primera vez, entre 1854-1859, en la que fueron detallados todos los aspectos y fases de la negociación que condujo al definitivo establecimiento del Santo Oficio en Portugal. Cfr. João Lúcio de AZEVEDO, *História dos cristãos-novos portugueses*, Lisboa, Clássica Editora, 1989 [1921]; Giuseppe MARCOCCI, *I custodi dell'ortodossia. Inquisizione e Chiesa nel Portogallo del Cinquecento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2004, y Amadio RONCHINI, «Giovanni III di Portogallo, il card. Silva e l'Inquisizione», en *Atti e memorie delle RR. Deputazioni di Storia Patria per le provincie dell'Emilia*, Nuova Serie, vol. IV, parte I, Modena, 1879.

<sup>5</sup> ANTT. Gaveta 2, m. 2, n. 39: Minuta de las instrucciones a Brás Neto. Cit. por Alexandre HERCULANO, *História da origem e estabelecimento da Inquisição em Portugal*, vol. 1, pp. 124-125.

<sup>6</sup> A. Herculano, *Op. Cit.*, vol. 2, p. 87.

<sup>7</sup> A. Herculano, *Op. Cit.*, vol. 2, pp. 127-129.

<sup>8</sup> A. Herculano, *Op. Cit.*, vol. 3, pp. 100-101.

sición por parte de don João III que, en 1539, había nombrado *inquisidor-geral* a su hermano el infante don Henrique. Pero no fue hasta el 1547 cuando, en virtud de la bula *Meditatio cordis*, D. João logró para Portugal una Inquisición semejante a la española, es decir, independiente de Roma.

Cuando en 1578 se produjo la trágica muerte del rey D. Sebastião en la batalla de Alcázarquivir, durante su aventura marroquí, el Santo Oficio portugués, presidido por el cardenal-infante D. Henrique, se encontraba, después de más de cuarenta años de funcionamiento regular, totalmente consolidado. La Inquisición se había organizado de acuerdo con la estructura del Santo Oficio español, es decir, mediante una red de tribunales de distrito –Lisboa, Coimbra, Évora y Goa– por encima de los cuales se situaba el *Conselho Geral* y, en última instancia, el *Inquisidor-mor*.

La muerte de D. Sebastião abrió un largo proceso sucesorio que, pese al breve reinado de D. Henrique, no se resolvería hasta la aclamación de Felipe II como nuevo rey de Portugal en 1581. Como ha señalado la historiografía lusitana, la Unión Dinástica se debió tanto a la negociación como a la conquista, sin dejar por ello de presidir ambas tácticas la conciencia que el monarca español tenía de ser el heredero legítimo de la antigua casa de Avis. La fórmula empleada para integrar Portugal en la Monarquía Hispánica fue la que se había utilizado en tiempos de los Reyes Católicos en la unión de Castilla y Aragón. Es decir, cada reino seguiría manteniendo sus leyes, fueros, privilegios e instituciones particulares<sup>9</sup>.

Al integrarse Portugal en la Monarquía Hispánica como reino autónomo y conservar sus propias instituciones, el Santo Oficio no sufrió variación alguna, a pesar de que en España existía un organismo similar lo que, en principio, podría haber permitido la unión de ambas inquisiciones. Podemos establecer una comparación con lo ocurrido en el caso de la Inquisición española<sup>10</sup>. Recordemos que, bajo Carlos V, el Consejo de la Inquisición española, escindido en dos cuando Fernando el Católico abandonó la regencia castellana, volvió a unirse para no separarse ya más, a pesar de que mantuviese cierta división interna<sup>11</sup>. En realidad, no se trataba más que de volver a la situación primitiva en la que el Consejo había nacido. Por el contrario, la Inquisición portuguesa y, en conse-

<sup>9</sup> Sobre el proceso de agregación de Portugal a la Monarquía Hispánica, *vid.* Fernando BOUZA ÁLVAREZ, *Portugal en la Monarquía Hispánica (1580-1640): Felipe II, las cortes de Tomar y la génesis del Portugal católico*, Madrid, 1986.

<sup>10</sup> Para un análisis de las diferencias entre la unión de Castilla y Aragón y la integración de Portugal en la Monarquía Hispánica, *vid.* Rafael VALLADARES, «Portugal en el orden hispánico», en Porfirio SANZ CAMAÑES, *La Monarquía Hispánica en tiempos del Quijote*, Madrid, 2005, pp. 493-499.

<sup>11</sup> José MARTÍNEZ MILLÁN, y Teresa SÁNCHEZ RIVILLA, «El Consejo de Inquisición (1483-1700)», *Hispania Sacra* XXXVI (1984), pp. 71-123.

cuencia, su *Conselho Geral*, totalmente independientes del Santo Oficio español, se conservaron así a lo largo de los sesenta años que duró la Unión Dinástica. Pero no se trató únicamente de una separación en los organismos rectores del Santo Oficio, sino en el conjunto de su estructura piramidal, de modo que todos los inquisidores de los tribunales de distrito de Lisboa, Évora, Coimbra y Goa, así como los ministros y oficiales inferiores, siguieron siendo portugueses.

La historia del Santo Oficio portugués durante el tiempo que duró la Unión Dinástica presenta ciertas lagunas dignas de atención<sup>12</sup>. Entre ellas, merece la pena analizar el especial cariz que adquirieron las quejas de los *cristãos-novos* en las cortes de Madrid y Roma contra la Inquisición. Y es que, aunque las críticas de los conversos al Santo Oficio fueron constantes desde el mismo establecimiento de la institución y el contenido de tales imputaciones apenas varió, el hecho de que Portugal quedase integrado en una estructura superior como era la de la Monarquía Hispánica y que en el resto de la Península Ibérica existiese otra Inquisición modificaron, en parte, el discurso converso.

Resulta interesante reflexionar sobre esta modificación de la táctica converso a principios del siglo XVII respecto a la de los años treinta y cuarenta del siglo XVI. Como hemos dicho antes, D. João III pretendió establecer en Portugal una Inquisición según el modelo de la española, lo que le valió una fortísima oposición por parte de los *cristãos-novos*. Paradójicamente, décadas después, serían los propios perseguidos quienes querrían ver en la Inquisición española una institución más benigna. Durante el período de Unión Dinástica, los *cristãos-novos* echaron mano de la Inquisición española como elemento comparativo para construir una imagen de justicia y equidad en contraposición con los abusos cometidos por su homóloga portuguesa. En las críticas de los *cristãos-novos* al Santo Oficio, el procedimiento inquisitorial dejó de ser malo *per se* y se construyó un discurso basado en la diferencia entre el bueno —es decir, el empleado en los tribunales españoles y romanos— y el injusto que seguían los tribunales portugueses, «con stilos, leyes y modos mui extrahordinarios y irregulares»<sup>13</sup>. La súplica de los perseguidos no era tanto la introducción de modificaciones cuanto la asimilación de las normas y prácticas procesales de las otras inquisiciones. Así, independientemente de extralimitaciones procesales concretas que cometiesen los inquisidores portugueses y de las reformas que fuera necesario introducir en la actuación del Santo Oficio, lo que nos interesa señalar es que durante todo el período de Unión Dinástica, los *cristãos-novos*

---

<sup>12</sup> Sobre la Inquisición portuguesa en tiempos de la Unión Dinástica, *vid* Joaquim Romero MAGALHÃES, «Em busca dos «tempos» da Inquisição (1573-1615)», *Revista de história das Ideias* 9 (1987), pp. 191-228. *Idem*: «E assim se abriu judaísmo no Algarve», *Revista da Universidade de Coimbra*, 29 (1981), pp. 1-73.

<sup>13</sup> AHN. Inq. Lib. 1272. Fols. 151r-191v. *Tractado de medios para reduzir a los hebreos...*

mantuvieron «que no ay otra causa de los daños que padezen si no es la diversidad de los stilos que se observan, diferentes o en la substancia o en la practica y modo»<sup>14</sup>.

#### LAS QUEJAS EN MADRID Y LAS PROPUESTAS DE REFORMA

Durante el período filipino, los *cristãos-novos* enviaron sus agentes a la corte del monarca católico para exponer sus quejas contra el Santo Oficio portugués. Otras propuestas de reforma fueron presentadas por quienes consideraban que la Inquisición portuguesa debía modificar su forma de proceder si quería extirpar el judaísmo. En realidad, ni unos ni otros pedían acabar con Santo Oficio ni que los culpables quedasen impunes, sino que se modificasen algunos aspectos del procedimiento inquisitorial de forma que se transformase, según su opinión, en un sistema más justo y, a la larga, más eficaz. Así, las distintas peticiones incidían en la necesidad de reformar la manera de probar los delitos, atajar las declaraciones falsas y castigar a los testigos que mintiesen. Como hemos señalado, para justificar estos cambios se recurrió, frecuentemente, a la conveniencia de que el Santo Oficio portugués siguiese el mismo procedimiento que el resto de inquisiciones del momento y en más de una ocasión se solicitó:

«Que se guarde en Portugal en las prisiones y procesos la práctica común y doctrinas recibidas en las santas Inquisiciones de Roma, Italia y Castilla, conformando con ellas (en lo que no estuviere conforme) el estilo que se guarda en Portugal, de que la experiencia ha mostrado tantos daños, que no se disminuyen, antes crescen, ni los inquisidores, siguiendo el dicho estilo, pueden remediarlo, aunque quieran»<sup>15</sup>.

Podemos analizar las propuestas de reforma del procedimiento inquisitorial portugués a partir de los memoriales enviados por los procuradores de los *cristãos-novos* tanto al monarca católico como al papa. Puesto que esta literatura recurre a las mismas imágenes y a idénticos argumentos, hemos optado por escoger uno de ellos, significativo porque fue enviado a Felipe III una vez que ya había pasado toda la marea motivada por el *perdão geral* de 1604. En segundo lugar, hemos recurrido a un tratado de tiempos de Felipe IV, también relevante porque forma parte de una larga y prolija corriente de escritos destinados a presentar los medios más adecuados para acabar con el judaísmo en Portugal.

El anónimo autor del memorial dirigido a Felipe III en la década de 1610 exponía las causas del desespero de los *cristãos-novos*, debido, a su juicio, a la

<sup>14</sup> AHN. Inq. Lib. 1272. Fols. 151r-191v. *Tractado de medios para reduzir a los hebreos...*

<sup>15</sup> BNL. Reservados. Fundo Geral. Cód. 868. Fols. 39r-41v: *Memorial em favor da gente da nação*. La cursiva es nuestra.



discriminación por la limpieza de sangre y al procedimiento del Santo Oficio. Dejemos aparte la primera de ellas y centrémonos en la reforma del procedimiento inquisitorial. Según el memorialista, no debería prenderse a nadie por actos «indiferentes» —es decir, que no fuesen heréticos en sí— ni tampoco a quien estuviese acusado por un único testimonio, salvo en circunstancias muy especiales. Asimismo, censuraba que los inquisidores indujeran las declaraciones de testigos y reos, con el fin de hacerles confesar aquello que deseaban oír. Parte del documento se ocupa de la reforma de la prueba testifical. Los testigos tendrían que especificar su relación con los acusados y, por otra parte, incidía en la vieja reivindicación de que constasen las circunstancias de lugar y tiempo; a su juicio se debía especificar hasta la hora. Resultaba fundamental para las garantías procesales de los reos la petición de que los testigos ratificasen su primer testimonio sin que se les leyese. Asimismo, solicitaba que se castigase duramente a los testigos falsos. Facilitar la defensa de los acusados constituye otro de los objetivos de este memorial. Para ello, deberían proporcionarse al reo todas las señas que le permitiesen averiguar quiénes habían declarado en su contra. Respecto a las penas, el memorialista suplicaba al rey que no fuesen relajados los reos convictos por testigos singulares<sup>16</sup>.

Años más tarde, ya casi a finales del período filipino, otro autor anónimo volvía a abogar por que se suavizase el procedimiento del Santo Oficio portugués, visto que la dureza y el rigor, empleados hasta entonces, no habían proporcionado los resultados esperados y, además, habían dado lugar a que muchos *cristãos-novos* fuesen condenados injustamente<sup>17</sup>. Para acabar con los abusos, proponía una serie de medidas, en gran parte coincidentes con las que ya hemos señalado. Los inquisidores deberían considerar tanto la calidad del denunciante como del reo y admitir, únicamente, delaciones de actos positivos de herejía formal y no de comportamientos indiferentes. Además, los testigos tendrían que especificar tanto el acto herético como las circunstancias de lugar y tiempo y, asimismo, ratificar sus declaraciones antes de que los jueces dicta-

---

<sup>16</sup> BNL. Reservados. Fundo Geral. Cód. 868. Fols. 39r-41v: *Memorial em favor da gente da nação*. Aunque el documento no está fechado, debe ser anterior a la muerte de Felipe III, a quien está dirigido, y posterior a 1610, porque hace referencia a la derogación de la licencia que el monarca había concedido en 1601 a los *cristãos-novos* para que pudiesen salir de Portugal. Este memorial fue, más tarde, impreso en tiempos de Felipe IV, si, como creemos, se trata del mismo al que aluden Azevedo y Pulido Serrano. Cfr. João Lúcio AZEVEDO, *História dos cristãos-novos portugueses*, Lisboa, Clássica Editora, 1989, p. 184, nota 1, y Juan Ignacio PULIDO SERRANO, *Injurias a Cristo. Religión, política y antijudaísmo en el siglo XVI. Análisis de las corrientes antijudías durante la Edad Moderna*, Madrid, Universidad de Alcalá, 2002, p. 80, nota 119. Sobre el problema planteado por las condenas fundamentadas en testigos singulares vid. *infra*.

<sup>17</sup> AHN. Inq. Lib. 1272. Fols. 151r-191v: *Tractado de medios para reduzir a los hebreos de la nación portuguesa que se han huido y conservar a los que en estos reynos quedan*.



sen la prisión del reo. El autor llegaba, incluso, a proponer que se impusiese pena de muerte a los testigos falsos.

El memorialista sugirió que se siguiera el procedimiento de la Inquisición romana, es decir, que, tras el interrogatorio en cárcel secreta, el acusado fuese puesto en cárcel pública. Puesto que el secreto inquisitorial constituía una fuente de abusos y denuncias falsas, los inquisidores deberían comunicar siempre al acusado las declaraciones de los testigos. Es más, en algunas ocasiones, determinadas por el *Conselho Geral*, podrían darse al reo los nombres de los testigos, de acuerdo con la práctica seguida en la Inquisición romana. La duración de los procesos resultaba fatal para los acusados; por ello, debería limitarse a cinco o seis meses o, cuando mucho, un año. Como tantos otros polemistas rechazaba las condenas fundadas en pruebas de testigos singulares y abogaba por suprimir o, por lo menos, limitar las penas de confiscaciones. De este modo, los *cristãos-novos*, seguros de que no perder sus bienes, permanecerían, dedicados al comercio, en los dominios del monarca católico.

A nuestro juicio, hay un aspecto mucho más relevante que las reclamaciones, quejas y medidas concretas que hemos señalado. Como en otros casos, los memoriales citados proponían que en Portugal se siguiese el modo de proceder de las inquisiciones de Roma y España:

«Que Vuestra Magestad sea servido mandar ver los estatutos, que se usan en las Inquisiciones de los Reynos de Castilla y en las de Portugal, para que del modo dellas y de su execucion se pueda hazer juizio si respecto del tiempo presente y estado de las cosas conviene moderar las de Portugal en conformidad de las de Castilla [...] y para todo lo neçessario se impetre Breve de Su Santidad»<sup>18</sup>.

Como vemos, los *cristãos-novos* y aquéllos otros que, sin serlo, abogaban por una modificación de los usos del Santo Oficio portugués, recurrieron al ejemplo proporcionado por los tribunales inquisitoriales de España y, en mucha menor medida, de Roma, como elemento comparativo con el que poder censurar el modo de proceder de la Inquisición portuguesa. Pero todavía hay otro aspecto que merece la pena reseñar. Los críticos solicitaban modificaciones que, a su juicio, concordaban con la práctica inquisitorial castellana. Ahora bien, ¿tenían una imagen correcta del funcionamiento del Santo Oficio hispánico? Veamos algunos ejemplos.

Según el autor del memorial enviado a Felipe III, en la Inquisición española se confrontaban las declaraciones de los testigos con sus ratificaciones, realizadas éstas sin que les leyese aquéllas; no se prendía a los cómplices delatados por quienes se presentaban voluntariamente a confesar sus errores; los inquisidores no inducían las declaraciones de testigos ni reos; se entregaban al reo y a

<sup>18</sup> BNL. Reservados. Fundo Geral. Cód. 868. Fols. 39r-41v: *Memorial em favor da gente da nação*.

su abogado las deposiciones de los testigos con las señas necesarias para que averiguasen su identidad; era precisa una prueba más contundente para prender a los que carecían de antepasados procesados por la Inquisición y, por último, quienes habían sido condenados a abjurar *de levi* no aparecían en auto público de fe. ¿No estamos ante la construcción de una imagen idílica, anhelada por los perseguidos, pero distante de la realidad?<sup>19</sup>

Es cierto que algunos de los aspectos incluidos en las reclamaciones de los *cristãos-novos* aparecen regulados en las diferentes *Instrucciones* de la Inquisición española. Por ejemplo, con respecto al encarcelamiento, las *Instrucciones* promulgadas en Valladolid, en 1488, y en Ávila, en 1498, disponían que, para ello, debería haber indicios suficientemente probados, lo que, bien es verdad, dejaba un amplio margen de discrecionalidad a los inquisidores, y que, una vez encarcelado el reo, no se dilatase el proceso<sup>20</sup>. Asimismo, las citadas normas se ocupaban del castigo los falsos testigos<sup>21</sup>. Las instrucciones de Valdés, por su parte, trataban de impedir que los inquisidores interrogasen sobre errores de los que el reo no estaba delato ni acusado<sup>22</sup>.

<sup>19</sup> Sobre el procedimiento de la Inquisición española vid. Bruno AGUILERA BARCHET, «El procedimiento de la Inquisición española», en Joaquín PÉREZ VILLANUEVA y Bartolomé ESCANDELL BONET, *Historia de la Inquisición en España y América*. Vol. II: *Las estructuras del Santo Oficio*, Madrid, BAC-CEI, 1993, pp. 334-558. Enrique GACTO FERNÁNDEZ, «Sobre algunos aspectos del proceso inquisitorial», en A. ROMANO, (coord), *Intolleranza religiosa e ragion di Stato nell'Europa Mediterranea*, en *Studi Storico Giuridici*, Università degli Studi di Messina, 13, pp. 15-37. *Idem*, «Aproximación al Derecho penal de la Inquisición», en José Antonio ESCUDERO (ed), *Perfiles jurídicos de la Inquisición española*, Madrid, 1989, pp. 175-193. *Idem*, «Consideraciones sobre el secreto del proceso inquisitorial», *Anuario de Historia del Derecho Español*, LXVII (1997), pp. 1631-1654. J. M<sup>a</sup> GARCÍA MARÍN, «Proceso inquisitorial-proceso regio. Las garantías del procesado», en A. ROMANO (coord), *Op. cit.*, pp. 39-60. Antonio PÉREZ MARTÍN, «La doctrina jurídica y el proceso inquisitorial», en J. A. ESCUDERO, *Perfiles jurídicos de la Inquisición española*, Madrid, 1989, pp. 279-322.

<sup>20</sup> En las *Instrucciones* de Valladolid de 1488 quedó establecido: «que los que fueren presos por este delito que no sean fatigados en las cárceles en la dilación del tiempo, que luego se haga el proceso con ellos, porque no haya lugar de quejarse y no se detengan a causa de no haber entera probanza, pues que es causa que, cuando sobreviene probanza, se puede de nuevo agitar, no obstante la sentencia que fuere dada». Publicadas por Miguel JIMÉNEZ MONTESERÍN, *Introducción a la Inquisición Española. Documentos básicos para el estudio del Santo Oficio*, Madrid, Editora Nacional, 1980, p. 107. Posteriormente, en las *Instrucciones* de Ávila, de 1498, se ordenaba «que los Inquisidores tengan tiento en el prender y no prendan ninguno sin tener suficiente probanza para ello, y después de así preso dentro de diez días se le ponga la acusación y en este término se le hagan las amonestaciones que en tal caso se requieren y procedan en las causas y procesos con toda diligencia y brevedad sin esperar que sobrevenga más probanza porque a esta causa ha acaecido detenerse algunas personas en la cárcel y no ten lugar a dilaciones, porque de ello se siguen inconvenientes, así en las personas como en las haciendas», *Ibidem*, pp. 117-118.

<sup>21</sup> «Item, que los inquisidores castiguen y den pena pública, conforme a Derecho, a los testigos que se hallen falsos», *Instrucciones de Ávila*, VIII, *Ibidem*, p. 119.

<sup>22</sup> «... y deben siempre los Inquisidores estar advertidos que no sean importunos ni demasiados en preguntar alguna de las cosas sustanciales, teniendo asimismo mucho aviso de no preguntar fuera de lo

En otros casos, las reformas que pretendían introducirse en la Inquisición portuguesa no podían fundarse en las *Instrucciones* españolas. Así ocurría, por ejemplo, con el tan traído y llevado asunto de las ratificaciones. Aunque en el memorial a Felipe III consta que, en Castilla, los testigos se ratificaban sin leerles su primera declaración, las *Instrucciones* de Valdés disponían lo contrario, si el deponente lo solicitaba<sup>23</sup>. Asimismo, y en contra de la opinión de los memorialistas, en la Inquisición española también se ocultaba, según lo dispuesto por Valdés, todo aquello que pudiese permitir al reo averiguar quién había declarado en su contra<sup>24</sup>.

Evidentemente, aunque no podemos negar que existiesen diferencias entre lo establecido en las *Instrucciones* de la Inquisición española y los *Regimentos* del Santo Oficio portugués, consideramos que, por encima de casos puntuales, ya fuesen éstos de similitud o de discrepancia entre ambas instituciones, los *cristãos-novos* o sus valedores recurrieron a una táctica consistente en presentar al monarca la equidad del procedimiento español para conseguir que apoyase la mudanza de los usos seguidos en la Inquisición portuguesa. La misma corona asumió esta dicotomía y la plasmó en uno de los documentos más interesantes para el estudio de la Inquisición portuguesa en tiempos de los Austrias. Tras años de negociaciones, en marzo de 1628, Felipe IV firmaba un decreto en el que se contenían las nuevas disposiciones sobre los *cristãos-novos* de origen portugués<sup>25</sup>. Junto con medidas que en nada afectaban al Santo Oficio –libertad de matrimonios, castigo a los que llamasen judíos a los *cristãos-novos*, etc.– había otras que tocaban de lleno al procedimiento inquisitorial. El documento

---

indiciado, si no fueren cosas que el reo dé ocasión por su confesión y si fuere confesando déjenle decir libremente, sin atajarle, no siendo cosas impertinentes las que dijere», *Instrucciones de Valdés*, n° 15, *Ibidem*, p. 206.

<sup>23</sup> «Estando recebidas las partes a prueba, los testigos se ratificarán en la forma del Derecho ante personas honestas que serán dos Eclesiásticos, que tengan las calidades que se requieren, cristianos viejos y de quien se tenga buena relación de su vida y costumbres, ante los cuales se les diga como el Fiscal los presenta por testigos. Pregúnteseles si se acuerdan de haber dicho alguna cosa ante algún juez en cosas tocantes a la Fe y si dijeren que sí, diga la sustancia de su dicho, y si no se acordare hágansele las preguntas generales, por donde se pueda acordar de lo que dijo y si *pidiere que se le lea, hacerse ha así*. Lo cual se entiende agora sean los testigos de cárcel o de fuera de la cárcel», *Instrucciones de Valdés*, n° 30, *Ibidem*, pp. 212-213. La cursiva es nuestra.

<sup>24</sup> «Ratificados los testigos como está dicho, sáquese en la publicación a la letra todo lo que tocara al delito, como los testigos lo deponen, quitando dello solamente lo que podría traer en conocimiento de los testigos...», *Instrucciones de Valdés*, n° 31, *Ibidem*, pp. 213. Más adelante, las instrucciones disponen que «se dará en la publicación en lugar y tiempo donde se cometió el delito porque toca a la defensa del reo, pero no se ha de dar el lugar del lugar», *Instrucciones de Valdés*, n° 32, *Ibidem*, pp. 213-214.

<sup>25</sup> Se han conservado varias copias de la carta enviada por Felipe IV al *Conselho Geral* que contenía las nuevas disposiciones sobre los *cristãos-novos*. Nosotros hemos consultado una en portugués que se encuentra en la Torre do Tombo (CGSO. Maço 12. N. 31) y otra en español, del Archivo Histórico Nacional (Inq. Lib. 534. Fols. 267r-271v).

es de sobra conocido y no consideramos necesario volver a glosarlo ahora. Lo que resulta enormemente significativo es que las nuevas disposiciones referentes al procedimiento inquisitorial –por cierto, no siempre originales– tratasen de conformar los estilos portugueses con la práctica española<sup>26</sup>. Es decir, en el decreto se encontraba la síntesis de un discurso, nacido en el círculo converso y asumido ahora por todos, que marcó los sesenta años de la Unión Dinástica.

#### EL PROBLEMA DE LOS TESTES SINGULARES

Ahora bien, por mucho que los *cristãos-novos* buscasen el apoyo del monarca, no está nada claro que éste pudiese modificar sin más el procedimiento inquisitorial, aunque sí tenemos noticia de que, en algunas ocasiones, intentó corregir ciertos abusos. Por ello, los *cristãos-novos* no dejaron de acudir al papa que, sin ningún género de duda, sí podía introducir modificaciones. En sus súplicas ante el sumo pontífice, los procuradores de la *gente da nação* recurrieron a la misma táctica empleada ante el rey, si bien incidieron, especialmente, en las diferencias entre el procedimiento inquisitorial portugués y el del Santo Oficio romano.

A finales del siglo XVI, varios miembros de una misma familia de *cristãos-novos* difundieron en Roma graves acusaciones contra la Inquisición portuguesa. Se trataba de Duarte Pinto, que había huido en 1594, y de Jerónimo Duarte, que abandonó el país dos años después. Duarte Pinto era hijo de Manoel Duarte, cirujano preso por el tribunal de Évora en mayo de 1594. Jerónimo, hermano de Paulo António que también había sido encarcelado en mayo de 1596, era hijo de Fernão Duarte, hermano de Manoel. Pocos años después, otro de los portugueses huidos, Gastão de Abrunhosa, logró, asimismo, que sus críticas a la Inquisición alcanzasen un notable eco tanto en Roma como en Valladolid, donde se encontraba la corte del monarca católico<sup>27</sup>. El mismo Abrunhosa recurrió

<sup>26</sup> «E suposto que segundo fui informado não ha diffirencia no estilo das Inquições desse Reyno as de Castella se advirtira particularmente que se proceda em todos os casos em hum mesmo genero de herejes uniformemente por ser o meyo mais conveniente para o castigo dos que delinquirem». ANTT. CGSO. Maço 12. N. 31. Fols. 1v-3r: Carta de Felipe IV al *Conselho Geral* del 13 de marzo de 1628, capítulo 3º.

<sup>27</sup> Conviene destacar el papel de Gastão de Abrunhosa en el contexto de los debates sobre el Santo Oficio portugués que tuvieron lugar a principios del siglo XVII. Para una exposición somera de sus críticas a la Inquisición portuguesa *vid.* Ana Isabel LÓPEZ-SALAZAR CODES, *La Inquisición portuguesa bajo Felipe III. 1599-1615*, trabajo de investigación presentado en la Universidad de Castilla-La Mancha en 2006. Un análisis mucho más detallado de la familia Abrunhosa en Giuseppe MARCOCCI, «A Inquisição portuguesa sob acusação: o protesto romano de Gastão de Abrunhosa», *Cadernos de Estudos Sefarditas*, Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, en prensa. Deseo expresar mi agradecimiento al doctor Giuseppe Marcocci de la *Scuola Normale Superiore de Pisa* por sus comentarios y sugerencias sobre este complejo problema.

a la comparación entre el procedimiento seguido en España y el de la Inquisición portuguesa por «ser contra derecho i contra lo que se usa en Castilla i más reinos»<sup>28</sup>. Según testimonio del dominico fray Vicente Pereira, «hablando con él [...] acerca del modo de proceder de los inquisidores de Portugal, Gastão de Abrunhosa dijo que tenían diferente manera de proceder que los inquisidores de Castilla porque los de Portugal procedían con mayor rigor y no procedían bien y que de aquello se había ya quejado al papa»<sup>29</sup>.

A pesar de que el embajador del rey católico, duque de Sessa, maniobró para impedirlo, Clemente VIII prestó oídos a las acusaciones de Abrunhosa y decidió consultarlas con los miembros de la *Congregazione del Sant'Uffizio*<sup>30</sup>. Dos aspectos preocupaban especialmente al papa: la facilidad con que los inquisidores aceptaban declaraciones falsas y las condenas por testimonios singulares. Había un tercer elemento constante en las súplicas de los *cristãos-novos*, de difícil arreglo, porque existía también en la práctica de las inquisiciones romana y española: el secreto.

Entre todas las iniquidades de que los *cristãos-novos* acusaban al procedimiento de la Inquisición portuguesa, la que despertó mayor preocupación en el papa fue la de las condenas fundadas en testigos singulares. Y ello por un motivo evidente: si en los tribunales inquisitoriales de España e Italia los jueces podían, en ocasiones, no discernir las declaraciones verdaderas de las falsas y si en todas las inquisiciones se mantenía el principio del secreto, en la cuestión de las llamadas *testemunhas singulares* existía una clara diferencia entre el Santo Oficio portugués y el resto. El sagaz duque de Sessa percibió muy bien que, de todos los argumentos esgrimidos para fundar que en Portugal se procedía contra derecho, sería éste el más eficaz para despertar el interés del sumo pontífice en el remedio de los abusos. Así, el embajador consideraba que, de todas las censuras, «en solo el punto de los testigos singulares se á reparado acá i deste se tratará»<sup>31</sup>.

El debate sobre la validez de los testigos singulares para probar el crimen de herejía marcará todo el tiempo de los Felipes y se prolongará durante el resto del siglo XVII. Durante cien años, no hubo aspecto jurídico de la Inquisición que generase mayor controversia. En Roma y en Lisboa, los pareceres a favor o en contra, las aclaraciones, los alegatos y los dictámenes se sucedieron alenta-

<sup>28</sup> AGS. Estado. Leg. 978. Fols. 141-143: Carta del duque de Escalona a Felipe III del 1 de junio de 1604. La cita corresponde a la minuta de una carta de Escalona al rey redactada por el propio Abrunhosa y que fue incluida por el embajador en el despacho final.

<sup>29</sup> ANTT. Inq. Lisboa. Proceso 16992. Fragmento de la declaración de fray Vicente Pereira ante el inquisidor Campofrío realizada en Valladolid a 27 de mayo de 1607.

<sup>30</sup> AGS. Estado. Leg. 977. Carta del duque de Sessa a Felipe III del 18 de enero de 1603.

<sup>31</sup> AGS. Estado. Leg. 977. Carta del duque de Sessa a Felipe III del 18 de enero de 1603.

dos por las constantes críticas de los *cristãos-novos* que habían encontrado en esta duda jurídica el flanco más débil del edificio inquisitorial; aquél por el que, quizás, se podría abrir la brecha que permitiese atacarlo todo. Se trataba de la diferencia más evidente entre el modo de proceder de la Inquisición portuguesa y el Santo Oficio romano. Constituía, además, la práctica en la que los críticos del Santo Oficio portugués podían fundamentar su acusación de que éste no procedía conforme a derecho.

Ahora bien, ¿qué eran los testigos singulares? Veamos la definición que aparece en unos apuntes sobre el procedimiento inquisitorial elaborados para uso de los diputados de la Inquisición portuguesa: «As contestes chamamos quando duas testemunhas concordão na pessoa do delinquente porque ambos dissem de Pedro; concordão no crime, porque ambas dissem que o dito Pedro fes tal acto judaico o disse tal proposição heretica; concordam no tempo e no lugar, por ambas dissem que fes Pedro o dito acto em tal parte; em outras circunstancias ainda que variem nem por isso deixam de se aver por testemunhas contestes. As que não concordão nas sobreditas cousas ou alguma dellas não são contestes e chamanse singulares»<sup>32</sup>.

La cuestión es sumamente complicada por cuanto no se trata de un aspecto específico del procedimiento inquisitorial, sino de un problema jurídico sobre el que trataron gran variedad de autores. Para simplificar en lo posible la cuestión, vamos a partir de los comentarios de Francisco Peña al *Directorium Inquisitorium* de Nicolás Eymerich. Y ello, por dos motivos. En primer lugar, la obra de Eymerich, junto con los comentarios de Peña, constituyó el más conocido de los manuales de inquisidores redactados por los juristas desde la Baja Edad Media. En segundo lugar, los comentarios de Peña, elaborados a finales del siglo XVI, dan cuenta de los principales debates y de las opiniones de juristas precedentes.

Peña y otros juristas distinguieron varios tipos de singularidad: *obstativa*, *adminiculativa* y *diversificativa*. La singularidad *obstativa* tenía lugar cuando las declaraciones de los distintos testigos singulares encerraban contradicción entre sí; la *adminiculativa*, cuando las declaraciones de los distintos testigos singulares se apoyaban y complementaban entre sí, y, por último, la *diversificativa*, cuando cada testigo deponía de un acto diferente en la sustancia o en la especie<sup>33</sup>. Evi-

---

<sup>32</sup> ANTT. CGSO. Maço 12. N. 5.

<sup>33</sup> Veamos las definiciones expuestas por Peña: «Obstativa est, quando ex dictis testium nascitur repugnantia, aut contrarietas, ut cum unus ait, alter vero negat. Quo caso dictum unius, alterius dictum aut debilitat aut infrigit aut non probat. Cumulativa est, cum dictum unius coadiuvat dictum alterius, ut cum unus deponit de facto, alter de fama; seu unus de visu, alter de auditu. [...] Ultima est diversificativa, ex qua nascitur diversitas rei in substantia, ut cum unus testis dicit uno loco et tempore quid factum, alius vero loco et tempore; quo casu dictum unius non infrigit dictum alterius immo coadiuvat et corrobatur». Francisco Peña, *comentario CXXI*, en N. EYMERICH, *Directorium Inquisitorium*, Venecia,



dentemente, dependiendo del tipo de singularidad, variaba el grado de prueba –semiplena, plena, etc.– que proporcionaban las declaraciones. No existía ninguna duda cuando las declaraciones de los testigos eran singulares *obstativas*, ya que éstas no probaban nada. Por el contrario, cuando la singularidad era *ad-miniculativa*, proporcionaban, según Eymerich, una prueba semiplena. Por lo tanto, el problema mayor era el de la singularidad *diversificativa*.

Eymerich fue categórico con respecto a los testigos singulares: «Nemo ex testibus singularibus etiam cum infamia de haeresi est condemnatus». Esta proposición de Eymerich constituye el punto de partida del análisis de Peña. Éste, en sus comentarios al *Directorium*, decidió hilar más fino y planteó ya diferencias en función de los tipos de singularidad:

«Eymerici axioma verum et communi voto receptum est, eiusque doctrina procedit non modo quando testes sunt singulares singularitate obstativa, quia tunc nulla esset difficultas: sed etiam cum sunt singulares, singularitate cumulativa, ut ipsemet auctor tradit in secundo axiome».

Para Peña, la mayor dificultad se encontraba, por lo tanto, en la singularidad *diversificativa*. Simplificando mucho, los testigos podían ser singulares en lugar, en tiempo o en los hechos, es decir, en el acto herético. Así, los testigos podían concordar en los hechos, pero diferir en tiempos y lugares<sup>34</sup>. Pero también era posible que varios testigos depusiesen sobre diferentes hechos cometidos en tiempos diversos<sup>35</sup>.

Podía darse el caso de que un testigo declarase que determinada persona había afirmado que Cristo no era el hijo de Dios y otro depusiese que, en otra ocasión, ese mismo individuo había manifestado que el Espíritu Santo no procedía del Hijo. En este sentido, algunos juristas consideraron que, para probar la herejía *in genere*, bastaban testimonios singulares sobre actos o proposiciones heréticas<sup>36</sup>. Por el contrario, Peña mantuvo que no se podía castigar al reo convic-

---

apud Marcum Antonium Zalterium, 1595, Tertia pars. Quaestio LXXII: «An ex pluribus testibus singularibus sit aliquis ccondemnandum».

<sup>34</sup> «Secundo, potest quis habere adversus se duos vel plures testes singulares de eadem seu eisdem haeresibus deponentes; discordant tamen in loco et tempore: ut si duo vel plures testes omni exceptione maiores ita se habeant, ut unus, verbi gratia, dicat se audivisse Bucerum nudius tertius in platea dixisse, summum Pontificem non esse caput Ecclesiae: alius vero dicat, se nudius quartus in scholis audivisse Bucerum asserentem Papam item non esse caput Ecclesiae». F. PEÑA, *comentario CXXI*.

<sup>35</sup> «Primo, cum duo vel plures deponent de diversis haeresibus, item diversis locis atque temporibus; ut cum, verbigratia, unus dicit se audivisse Lutherum negantem Purgationum mense Maio: alius vero dicti se audivisse eundem Lutherum negantem potestatem summi Pontificis mense Aprilis». F. PEÑA, *comentario CXXI*.

<sup>36</sup> «... multorum sententia est, ad probandum aliquid in genere sufficere quidem testes singulares. ut verbigratia, in exemplo posito, si agatur in genere probando, an Bucerus sit haereticus, satis est si per



to de ser hereje *in genere*, puesto que «... genus enim quid confusum est, incertum et commune et ubi quid in genere probaveris, nullum adhuc certum individuum demostrasti itaque convincere aliquem esse haereticum in genere aut nihil est, aut ridicula plane est loquendi ratio».

Ahora bien, ¿qué ocurría cuando los testigos concordaban en la especie de herejía, es decir, cuando declaraban acerca del mismo error herético, si bien cometido en tiempos y lugares diferentes? En este caso, algunos juristas consideraron que la herejía quedaba plenamente probada<sup>37</sup>. Sin embargo, Peña matuvo que los testigos discordantes en el lugar y tiempo, aunque declarasen de la misma especie de herejía, eran sigualres y no podían probar plenamente, si bien bastaban para aplicar el tormento y, en caso de que el reo no confesase ni los indicios quedasen suficientemente desmentidos, para condenar a abjurar *de vehementi*<sup>38</sup>.

Independientemente de que el problema de los testimonios singulares hubiese generado controversias anteriores, lo cierto es que fue durante el período de los Austrias cuando provocó mayores debates. A partir de entonces, y al menos hasta la suspensión del Santo Oficio en 1674, la cuestión de los *testes singulares* se convirtió en duda jurídica recurrente. Ningún otro asunto superó, como éste lo hizo, el estrecho ámbito de la disputa jurídica entre letrados para convertirse en argumento del debate general sobre el procedimiento del Santo Oficio y en un arma esgrimida por todos aquellos que se oponían a los usos y métodos inquisitoriales. Esta generalización –y soy consciente de las limitaciones del término– del debate sobre el problema de los testigos singulares es un fenómeno característico del período de los Austrias que, como tantos otros surgidos entonces, pervivirá mucho más allá del 1 de diciembre de 1640.

En 1593, con anterioridad, incluso a que se desatase el conflicto por el perdón general, D. António Matos de Noronha, obispo de Elvas y entonces presidente del *Conselho Geral*, había mostrado ya cierta preocupación por las condenas fundamentadas en testimonios singulares. En diciembre de dicho año, el presidente recibió, que sepamos, sobre el asunto dos cartas de los doctores Juan Álvares de Caldas, consejero de la Suprema en Madrid, y Pedro Barbosa, miembro del Consejo de Portugal, en respuesta a otras tantas

---

testes singulares de diversis haeresibus et diversis locis atque temporibus prolatis conuincatur: tunc enim probatum erit in genere Bucerum haereticum esse». F. PEÑA, *comentario CXXI*.

<sup>37</sup> «... si quis verbi gratia, vincatur Bononiae dixisse; Papam non esse caput militantiis Ecclesiae et Romae per alium testem, item dixisse: Papam non esse caput militantis Ecclesiae». F. PEÑA, *comentario CXXI*.

<sup>38</sup> «... puto hoc testes loco et tempore discordes quamvis de eadem haeresi seu haeresibus depontant, singulares esse, ideoque non plene probare: neque ex talium dictis ad poenam criminis ordinariam imponendam nullo modo esse accedendum». F. PEÑA, *comentario CXXI*.

suyas<sup>39</sup>. Según se deduce de estos documentos, D. António Matos de Noronha había preguntado a los doctores Caldas y Barbosa la práctica que debía seguirse cuando el delito de herejía podía probarse únicamente por testigos singulares.

En su respuesta, el doctor Juan Álvarez de Caldas afirmaba que en un reciente auto de fe celebrado en Granada al que había asistido se habían relajado algunas mujeres convictas por las declaraciones de entre veinte y cuarenta testigos singulares. De ser esto así, echaba por tierra el argumento de los críticos con la Inquisición portuguesa por cuanto sostenían que ni en la española ni en la romana se podían fundar las condenas en tal tipo de pruebas. El propio doctor Caldas consideraba que los testigos que declaraban sobre unos mismos hechos, aunque no concordasen en el tiempo, no podían tenerse por singulares. Más aún, en su opinión, aunque las declaraciones de los testigos no concordaran en el tiempo ni en hechos, los inquisidores podrían condenar a los reos si los testigos eran muchos y deponían de prácticas y ceremonias judaicas<sup>40</sup>. Por su parte, el doctor Pedro Barbosa también coincidía con Caldas en considerar que el delito de herejía podía probarse por medio de los testigos singulares, siempre y cuando concurriesen, además, otros indicios, como, por ejemplo, la fama.

Los breves pareceres de los doctores Caldas y Barbosa contenidos en sus cartas al futuro *inquisidor-geral* Matos de Noronha resultan enormemente significativos porque constituyen el inicio de una larga corriente de alegatos en favor de la práctica de la Inquisición portuguesa que perdurará hasta, al menos, la década de 1670. Por otra parte, provienen de personas de gran relevancia y prestigio que, cuando estalle la controversia sobre el perdón general, en tiempos de Felipe III, intervendrán en los debates sobre el Santo Oficio portugués. Así, por ejemplo, el doctor Barbosa era miembro del Consejo de Portugal y, quizás, el más prestigioso jurista portugués de finales del XVI, mientras que el doctor Juan Álvarez de Caldas participó en las juntas sobre la Inquisición portuguesa que se reunieron en Valladolid en 1603 y 1604<sup>41</sup>.

<sup>39</sup> En principio, ambas cartas debieron incluirse en el libro número 224 del *Conselho Geral do Santo Ofício*, pues se mencionan en su índice. Sin embargo, actualmente sólo se encuentra en dicho libro la de Pedro Barbosa a D. António Matos de Noronha. Hemos dado con la del doctor Juan Álvarez de Caldas en el *maço* 12 del *Conselho Geral*.

<sup>40</sup> ANTT. CGSO. *Maço* 12. N.º. 11: Carta del doctor Caldas a D. António Matos de Noronha del 13 de diciembre de 1593.

<sup>41</sup> El doctor Pedro Barbosa fue miembro del Consejo de Portugal, como *desembargador do Paço*, entre 1583 y 1602. Antes de pasar a formar parte de dicho órgano, fue profesor en la Universidad de Coimbra. Tras abandonar el Consejo ejerció el cargo de *Chanceler-mor*, hasta su muerte en 1606. Cfr. Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ, «Los funcionarios del Consejo de Portugal: 1580-1640», *Cuadernos de investigación histórica*, 12 (1989), pp. 197-228. Fernanda OLIVAL, *D. Filipe II*, Lisboa, 2005, p. 134.

A principios del siglo XVII, en el contexto de los intensos debates que tuvieron lugar en Lisboa, Valladolid y Roma, en los que se trataron gran variedad de asuntos sobre el procedimiento inquisitorial portugués, la cuestión de las *testemunhas singulares* volvió a adquirir un renovado interés, especialmente para aquéllos que trataban de desacreditar la labor del Santo Oficio ante los ojos del papa y del rey. Los debates se acentuaron por la actitud de la Santa Sede, pues, como hemos dicho, el papa Clemente VIII manifestó claramente que, salvo en ciertos casos y con grandes limitaciones, rechazaba las condenas fundadas en tal tipo de pruebas. Al parecer, cuando el Santo Oficio portugués respondió a las quejas de los *cristãos-novos*, Clemente VIII quedó convencido del buen procedimiento de los inquisidores «excepto en el punto de castigar por el dicho de un testigo singular que le pareció reza cosa y contra todo derecho»<sup>42</sup>.

Ante las constantes críticas de los *cristãos-novos*, el Santo Oficio debió extremar sus cautelas, sobre todo en materia de encarcelamientos. El *Regimento* de 1552 establecía que no se decretase la prisión de acusados por un único testigo, salvo que éste fuera persona de crédito o concurriesen otras circunstancias a juicio de los inquisidores<sup>43</sup>. Resulta evidente que tal disposición dejaba un amplio margen de arbitrio a los inquisidores y las prisiones decretadas tras la delación de una única persona no debieron ser infrecuentes. Según Elvira Mea, durante el período comprendido entre 1541 y 1604, de los 2.311 procesos sustanciados en el tribunal de Coimbra, hubo unos doscientos en los que los acusados fueron presos a raíz de las declaraciones de un sólo testigo<sup>44</sup>. Bien es verdad que aunque un reo fuese encarcelado tras la acusación de una sola persona no necesariamente tenía que sufrir una condena basada en testigos singulares, pero sí es cierto que, aunque podían, con el tiempo, unirse nuevas delaciones, los inquisidores iniciaban el proceso con cierto grado de debilidad probatoria, al carecer, desde el principio, de testigos contestes. Para tratar de controlar esta práctica, en junio de 1600, el *Conselho Geral* ordenó a los tribunales de Lisboa, Coimbra y Évora que no se prendiesen reos de herejía delatados por un sólo testigo sin que primero el *Conselho* analizase el auto de prisión<sup>45</sup>. Al año siguiente, los inquisidores de Coimbra solicitaban permiso al *Conselho Geral* para

---

<sup>42</sup> AGS. Estado. Leg. 979. Sin fol. Consulta del Consejo de Estado de julio de 1604 sobre la carta del duque de Escalona del 1 de junio.

<sup>43</sup> *Regimento*, 1552, capítulo 24. Publicado por José Eduardo FRANCO y Paulo de ASSUNÇÃO, *As metamorfoses de um polvo. Religião e Política nos Regimentos da Inquisição Portuguesa (Séc. XVI-XIX)*, Lisboa, Prefácio, 2004, pp. 107-135.

<sup>44</sup> Elvira Cunha de Azevedo MEA, *A Inquisição de Coimbra no século XVI. A instituição, os homens e a sociedade*, Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1997, p. 366.

<sup>45</sup> ANTT. CGSO. Liv. 365. Fol. 14r: Carta del *Conselho Geral* a los inquisidores de Lisboa, Coimbra y Évora del 3 de junio de 1600. Cfr. Joaquim Romero MAGALHÃES, «E assim se abriu judaísmo no Algarve», *Revista da Universidade de Coimbra*, 29 (1981), p. 10, nota 46.

prender, en virtud de un único testimonio, a las personas acusadas por los reos que iban a ser relajados, siempre que tuviesen con ellos cierto grado de consanguinidad o afinidad. Una vez más, el *Conselho* reiteraba la orden de junio del año anterior<sup>46</sup>. Y, en 1602, ordenaba a los inquisidores de Évora que, antes de decretar la prisión de quienes tenían sólo un «cuarto» de *cristão-novo*, realizasen diligencias tanto sobre los testigos como sobre los reos para averiguar la verdad «pello muito que importa neste tempo ao bom procedimento do Santo Officio nam aver testemunhas falsas porque esto he o com que a gente da nam cam se defende dizendo que as ha no Santo Officio e quanto isto prejudica a autoridade delle que elles o entendem muy bem»<sup>47</sup>.

A partir de 1603, arreció el debate sobre los testigos singulares. En primer lugar, Clemente VIII, a raíz de las acusaciones de Abrunhosa, decidió tratar el asunto con los cardenales de la *Congregazione del Sant'Uffizio* para intentar buscar una solución al problema. Por otra parte, meses después, Felipe III comunicaba al obispo de Leiria, D. Pedro de Castilho, su intención de presentarlo al papa para el cargo de *inquisidor-geral*. En diciembre de ese mismo año de 1603, Castilho viajaba a Valladolid, donde se estaban debatiendo las grandes cuestiones que afectaban al Santo Oficio: el *perdão geral*, las apelaciones a la Santa Sede y el procedimiento inquisitorial. Resulta cuando menos significativo que en este contexto, en que el Santo Oficio debía luchar en dos frentes —el perdón general y la reforma de los estilos inquisitoriales—, algunos teóricos considerasen que era mucho más importante para la propia institución el segundo de ellos. Así, en un parecer anónimo sobre los testigos singulares, redactado probablemente en estos años, encontramos la sorprendente afirmación de que «venia generalis quam proximis annis petebant, cuius petitionis meritissimam tulerunt repulsam, siquidem illa venia a punitione solum praeteriorum criminum illos eximisset, at vero immutatio praxis judicialis qua contra illos proceditur et pro praeteritis et pro futuris in perpetuum eos tutos redderet ne pro his aut illis condemnari aut puniri possint»<sup>48</sup>.

Una vez en la corte, D. Pedro de Castilho si bien tuvo que transigir de manera más o menos voluntaria con la derrota momentánea que suponía para el Santo Oficio la concesión del *perdão geral* a los *cristãos-novos*, no por ello dejó de defender la autonomía de la Inquisición frente a las intromisiones externas, procediesen de la corona o del papa. Así, desde Valladolid, donde permaneció un año, y

<sup>46</sup> ANTT. CGSO. Liv. 365. Fol. 86r: Carta del *Conselho Geral* a los inquisidores de Coimbra del 27 de abril de 1601.

<sup>47</sup> ANTT. CGSO. Liv. 368. Fol. 94r: Registro de cartas del secretario del *Conselho Geral* a los inquisidores de Évora del 25 de enero de 1602.

<sup>48</sup> ANTT. CGSO. Maço 12. N. 13: *Informatio facti et iuris circa modum procedendi inquisitorum Lusitania in judicandis interdum pro convictis quibusdam haereticis per testes singulares*.

con el respaldo que le proporcionaba el apoyo del monarca católico, el obispo de Leiria trató de impedir que el papa aceptase las apelaciones de los *cristãos-novos* y que modificase la práctica inquisitorial referente a los testigos singulares<sup>49</sup>.

De todas formas, no está claro que el deseo de Clemente VIII llegase más allá de comunicar el asunto con los cardenales de la *Sacra Congregazione*, pues no era infrecuente que cuestiones relevantes como éstas fuesen debatidas, a veces durante años, sin que de ello resultasen consecuencias prácticas. En la primavera de 1604, el padre jesuita Francisco Pereira, calificador de la Inquisición de Lisboa, a la sazón en Roma, expuso las razones del Santo Oficio luso al Sumo Pontífice y quedó relativamente convencido de que Clemente VIII no emitiría ningún decreto sobre dicho problema<sup>50</sup>. No obstante, el *inquisidor-general* consideraba que era necesario estar preparado por si el pontífice decidía, finalmente, intervenir. Por ello, D. Pedro buscó el apoyo del rey, al que solicitó que defendiese ante el papa el procedimiento del Santo Oficio, y del inquisidor general de España, Juan Bautista de Azevedo. Asimismo, pidió a los diputados del *Conselho Geral* que le enviasen el parecer sobre la prueba de la herejía a partir de testimonios singulares elaborado por el doctor Pedro Barbosa, por si era necesario remitirlo a Roma<sup>51</sup>. Otros pareceres fueron redactados por el doctor Mendo da Mota de Valadares, miembro del Consejo de Portugal, y por don Pedro Pacheco, consejero de la Suprema<sup>52</sup>. Hasta el propio Castilho elaboró un alegato sobre el mismo asunto<sup>53</sup> y, según parece, logró, incluso, un dictamen del mismo Acevedo<sup>54</sup>. Antes de ser enviados a Roma, todos estos documentos pasaron primero por el Consejo de la Suprema donde fueron analizados, pues uno de los objetivos principales de Castilho era que la Inquisición española apoyase al Santo Oficio portugués en este asunto frente a las intromisiones del papa<sup>55</sup>.

<sup>49</sup> Sobre el problema que generaron las apelaciones de los *cristãos-novos* al papa en los años inmediatamente anteriores al perdón general, *vid.* Ana Isabel LÓPEZ-SALAZAR CODES, *Op. Cit.*

<sup>50</sup> ANTT. CGSO. Liv. 130. Fols. 85r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al *Conselho Geral* del 24 de abril de 1604. *Ibidem.* Fols. 90r-90v: Carta de D. Pedro de Castilho al *Conselho Geral* del 30 de junio de 1604.

<sup>51</sup> ANTT. CGSO. Liv. 130. Fols. 88r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al *Conselho Geral* del 2 de junio de 1604. *Ibidem.* Fols. 91r y ss: Carta de D. Pedro de Castilho al *Conselho Geral* del 5 de julio de 1604.

<sup>52</sup> ANTT. CGSO. Maço 12. N. 12. Fols. 1r-17r: *Concilium doctoris Mendi a Motta super probatione per testes singulares in causa fidei*. BNL. Reservados. Fundo Geral. Cód. 1535. Fols. 287-301: *Parecer de Mendo da Mota de Valadares acerca da prova por testemunhas singulares na Inquisição*. ANTT. CGSO. Maço 12. N. 14: *Papel que fes Dom Pedro Pacheco sobre o que provão as testemunhas singulares*.

<sup>53</sup> BNL. Reservados. Fundo Geral. Cód. 1535. Fols. 275-276: *Parecer do bispo de Leiria acerca da prova por testemunhas singulares na Inquisição*.

<sup>54</sup> ANTT. CGSO. Liv. 92. Fols. 132r-132v: Instrucción de D. Pedro de Castilho a Gonzalo Carreiro. 6 de febrero de 1605.

<sup>55</sup> ANTT. CGSO. Liv. 130. Fols. 91r-v y 91Ar-v: Carta de D. Pedro de Castilho al *Conselho Geral* del 17 de julio de 1604.

Con todos estos pareceres la Inquisición portuguesa intentaba demostrar que, en los procesos de fe, los testigos singulares constituían una prueba perfecta. Sería absurdo pensar que, a principios del XVII, los letrados lusos dieron con nuevos argumentos en los que fundar sus opiniones. Los extensos pareceres que redactaron no sobresalen, en ningún caso, por su originalidad; se trata, como por otra parte es lógico, de un compendio de opiniones de juristas anteriores. Pero, aun así, merece la pena detenerse brevemente en los argumentos utilizados en defensa de sus tesis.

El doctor Barbosa sostenía que, a partir de lo dispuesto en el decreto *In fidei favorem* –*De Haereticis*, en *Sexti Decretalia*– el crimen de herejía podía probarse por testigos singulares. Dado que en los procesos de herejía se admitían testigos que en otras causas serían considerados inhábiles –como, por ejemplo, excomulgados y cómplices– era preciso para probar el delito que se acumulase un número suficiente de deponentes –al menos tres– y que concurriesen otras circunstancias que apoyasen sus testimonios. Barbosa consideraba, por lo tanto, que puesto que el decreto *In fidei favorem* no disponía sino que hubiese varios testigos, sin especificar si debían ser contestes o singulares, bastaban éstos últimos para probar el crimen de herejía<sup>56</sup>. Ahora bien, a las declaraciones debían unirse, tal como disponía el decreto, ciertas firmezas derivadas de la calidad de los testigos y de los acusados. Así, se presumía veracidad en un testigo que declaraba contra parientes y personas cercanas que, además, tenían determinada condición socio-religiosa. Para la Inquisición portuguesa cualquier *cristão-novo* era un potencial hereje y, además, los ministros de la fe solían disponer de delaciones mutuas entre reos de una misma familia. Así, por ejemplo, Manoel Duarte, de quien ya hemos hablado, fue condenado a ser relajado por haber sido convicto de judaísmo a partir de las declaraciones de once testigos singulares. De estos testigos, uno era cristiano viejo; otro, su sobrino y otros dos, sus cuñados. En los casos en los que los testigos no tenían ningún parentesco con el acusado, los inquisidores no dejaban por ello de admitirlos, pues «posto que nam tenham parentesco com elle sam de credito»<sup>57</sup>. Ahora bien, ocurría frecuentemente que los testigos no sólo eran singulares respecto al tiempo sino también en cuanto a los hechos. Para Barbosa, cuando los testigos se referían a diferentes proposiciones o signos externos podían constituir prueba siempre que apuntasen al mismo delito herético<sup>58</sup>.

<sup>56</sup> BNL. Cód. 1535. Fols. 279-285: *Parecer de Pedro Barbosa acerca da prova por testemunhas singulares na Inquisição*.

<sup>57</sup> ANTT. CGSO. Liv. 224. Fols. 209r-214r: Respuesta de Martim Afonso de Melo y Rui Pires da Veiga, inquisidores de Évora, a unas preguntas del *inquisidor-geral* sobre el estado de la inquisición de Évora. 1 de julio de 1597.

<sup>58</sup> ANTT. BNL. Cód. 1535. Fols. 279-285: *Parecer de Pedro Barbosa acerca da prova por testemunhas singulares na Inquisição*.



Por su parte, Mendo da Mota de Valadares consideró que los testigos singulares bastaban para condenar tanto en el caso de que se tratase de herejía «in genere»<sup>59</sup> como «in specie»<sup>60</sup>, sobre todo si concurrían otras circunstancias como, por ejemplo, la fama del acusado, el elevado número de testigos o la pertenencia del reo a una minoría socio-religiosa en la que se encontrase difundido el error herético, como podía ser la de los *cristãos-novos* portugueses.

Cuando Clemente VIII, mediante el breve *Postulat a nobis* publicado por el propio D. Pedro del Castilho en Lisboa el 16 de enero de 1605, concedió el perdón general a *cristãos-novos* y, en consecuencia, los presos fueron puestos en libertad, la situación se tranquilizó y distó mucho de los intensos debates que, amparados por el ambiente general de polémica, habían tenido lugar los años anteriores. Tal y como preveía el padre Francisco Pereira, Clemente VIII murió sin llegar a promulgar ninguna resolución sobre los testigos singulares. Sin embargo, al principio de su mandato, Castilho prefirió mantener la actitud de cautela que, como ya hemos comentado, adoptó el *Conselho Geral* cuando arreciaron las críticas de los *cristãos-novos*. Así, en julio de 1605, volvió a ordenar a los inquisidores que no prendiesen a ninguna persona acusada por un único testigo sin su permiso.

Con el tiempo, el Santo Oficio fue recuperando seguridad y confianza en que, a pesar de los debates y controversias de los años anteriores, mantendrían su autonomía. El *inquisidor-geral* dejó de considerar necesarias las medidas arbitradas para hacer frente a las críticas y decidió volver a la forma de proceder tradicional. Por ello, en julio de 1608, derogó las órdenes del 3 de junio de 1600 y del 20 de julio de 1605 referentes a las prisiones por testimonios singulares<sup>61</sup>. Unos años después, el propio Castilho, en el nuevo *Regimento* publicado en 1613, disponía:

«Por uma só testemunha se não procederá a prisão ordinariamente, salvo quando parecer aos inquisidores que é caso para isso e a testemunha é de crédito e que fala verdade»<sup>62</sup>.

<sup>59</sup> «veluti si unus dicat Maevium asservisse Romanum Pontificem non esset (*sic*) caput ecclesiae et alius eundem Maevium asservisse non esse Christum vere et proprie in sacramento Eucharistiae, vel si unus dicat Maevium conculcasse imaginem Christi et alius deponat fecisse orationes x<sup>a</sup> ritus Lutheri seu Calvinii». ANTT. CGSO. Maço 12. N. 12. Fols. 1r-17r: *Concilium doctoris Mendi a Motta...*

<sup>60</sup> «veluti si unus dicat Maevium in Ullisipone mense aprilis asservisse legem Moisis adhuc hodie esse in sua veridica observantia vel fecisse aliquem actum in observantiam illius et alter testis dicat eundem Maevium Conimbricæ mense maio asservisse legem Moisis adhuc hodie vigere vel fecisse aliquem actum in observantia eiusdem legis». ANTT. CGSO. Maço 12. N. 12. Fols. 1r-17r: *Concilium doctoris Mendi a Motta...* Subrayado en el original.

<sup>61</sup> ANTT. CGSO. Liv. 365. Fol. 45v: Carta de D. Pedro de Castilho a los inquisidores de Lisboa, Coimbra y Évora del 4 de julio de 1608.

<sup>62</sup> *Regimento do Santo Ofício*, Lisboa, por Pedro Craesbeck, 1613, título IV, capítulo IX. Publicado por José Eduardo FRANCO Paulo de ASSUNÇÃO, *Op. Cit.*, pp. 147-227.



Una vez que el Santo Oficio recuperó su poder y autoridad y los consagró en dicho *Regimento* –primera de las Instrucciones portuguesas impresa–, los debates sobre el procedimiento inquisitorial quedaron en un segundo plano hasta que, al advenimiento de Felipe IV, los *cristãos-novos* redoblaron sus presiones para que el monarca mejorase su situación legal y jurídica. Asimismo, trataron de conseguir que el monarca católico interviniese en la ya larga cuestión del procedimiento inquisitorial y acabase con lo que, en opinión de los perseguidos, no eran sino abusos que acarreaban el castigo de inocentes<sup>63</sup>.

La evolución de las negociaciones entre los *cristãos-novos* portugueses y la corona durante el valimiento de Olivares es de sobra conocida y no consideramos necesario volver sobre ella<sup>64</sup>. Vamos a incidir, únicamente y como colofón de lo dicho hasta ahora, en el problema, nunca resuelto, de los testigos singulares. En la famosa carta regia del 13 de marzo de 1628, Felipe IV declaró que no estaba justificada la forma de proceder de la Inquisición portuguesa en la relajación de los reos convictos por testigos singulares de tiempo. Por ello, ordenó suspender esta práctica hasta que tomase una resolución definitiva<sup>65</sup>.

Con este decreto, los *cristãos-novos* alcanzaban, después de décadas de pugna, una de sus principales aspiraciones: la supresión de las condenas fundadas en testigos singulares. Como hemos señalado antes, el Santo Oficio portugués nunca admitió que la corona tuviese jurisdicción para intervenir en la reforma del procedimiento inquisitorial. En este momento, debido a la vacante del cargo de *inquisidor-geral* por la muerte de don Fernão Martins Mascarenhas en enero de 1628, cupo al *Conselho Geral* la tarea de defender la autonomía y la jurisdicción inquisitorial ante las intromisiones del monarca. En la respuesta a la carta regia, el *Conselho* fue categórico y decidió prescindir de las alegaciones de derecho que había utilizado para defender su procedimiento en ocasiones similares como las que hemos expuesto anteriormente. El *Conselho* recurría aho-

<sup>63</sup> La bibliografía sobre las relaciones entre la corona y los conversos durante el valimiento de Olivares es muy numerosa, por lo que sólo citaremos aquí las obras clásicas. El mejor análisis de las negociaciones entre la monarquía y los *cristãos-novos* continúa siendo la clásica *História dos cristãos-novos portugueses*, de João Lúcio de Azevedo. Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, *Los judeoconversos en España y América*, Madrid, Istmo, 1971. Julio CARO BAROJA, *Los judíos en la España Moderna y Contemporánea*, Madrid, Istmo, 1962. Asimismo, E. N. ADLER, «Documents sur les marranes d'Espagne et Portugal sous Philippe IV», *Revue des Études Juives*, t. XLVIII-LI (1904-1906).

<sup>64</sup> Una síntesis reciente de dichas negociaciones en Juan Ignacio PULIDO SERRANO, *Op. Cit.*, especialmente el capítulo dedicado a «La política relativa a los cristianos nuevos portugueses en el reinado de Felipe IV». Asimismo Mauricio EBBEN, «Un triángulo imposible: la corona española, el Santo Oficio y los banqueros portugueses, 1627-1655», *Hispania*, LIII/2, 184 (1993), pp. 541-556.

<sup>65</sup> ANTT. CGSO. Maço 12. N. 31. Fol. 3r.

ra a argumentos claros y tajantes basados en la experiencia, la utilidad y la necesidad<sup>66</sup>. Los *diputados* del *Conselho* echaron mano de la larga tradición con que contaba una práctica que había sido aprobada de manera tácita por el cardenal infante D. Henrique y por el resto de inquisidores generales, sus sucesores, y que, además, nunca había sido prohibida por los sumos pontífices. Asimismo, los *diputados* argüían que numerosos juristas consideraban suficientes los testigos singulares para probar el crimen de herejía. Por otra parte, los inquisidores mantenían que, si no se recurría a testigos singulares, muchos culpables quedarían impunes, debido al secreto con que los *cristãos-novos* proclamaban sus creencias y realizaban las prácticas judaicas. Por último, la Inquisición podía alegar en su favor que las condenas fundadas en testimonios singulares no sólo tenían lugar en los casos de herejía, sino en otros crímenes que no estaban bajo su jurisdicción<sup>67</sup>. En este sentido, no podemos olvidar que apenas un año antes, el propio Felipe IV había decretado que el delito de introducir vellón en el reino pudiese probarse por medio de testigos singulares.

En otro parecer sobre el decreto del 13 de marzo de 1628, dirigido, probablemente, al *Conselho Geral*, el autor anónimo –quizá un ministro del propio Santo Oficio– llevó a cabo una amplia defensa del procedimiento inquisitorial en materia de testigos singulares. Pero, a diferencia de los pareceres redactados cuando estalló la polémica de 1603, este alegato huía del latín y de las consabidas teorías de los diferentes juristas, tan traídas y llevadas en los textos clásicos sobre este problema, y se centraba, únicamente, en exponer la costumbre seguida en la Inquisición portuguesa. Este recurso al análisis de la práctica real y cotidiana confiere sumo interés al documento. Según el autor anónimo, el Santo Oficio luso procedía a partir de testigos singulares:

«Porque a heresia he hum erro de entendimiento que tem habitual e moral continuação o quoa per varios actos se conhece e manifesta. Vg. o iudaismo pella guarda dos sabados, e outros ritos semelhantes desta ley e quando as testemunhas depoem destes taes actos inda que singulares e diversos comvem no ditto erro de que elles todos procederão o que basta pera a prova ser auida por conteste no delicto principal de que se trata»<sup>68</sup>.

Pero nuestro autor, como tantos otros defensores y detractores del procedimiento inquisitorial portugués que escribieron durante el período filipino, no

---

<sup>66</sup> Uno de los argumentos clásicos utilizados por el Santo Oficio para justificar las condenas basadas en testigos singulares era el hecho de que un hereje podría corromper a innumerables personas declarando su herejía a cada una de ellas de forma individual y, si no se admitía la prueba por testigos singulares, dicho hereje quedaría impune.

<sup>67</sup> AHN. Inq. Lib. 534. Fols. 267r-271v: Copia de la carta de Felipe IV al *Conselho Geral* del 13 de marzo de 1628 y respuesta de éste al monarca.

<sup>68</sup> ANTT. CGSO. Maço 12. N. 31. Fols. 12r-12v.

podía obviar la comparación con lo que ocurría en el Santo Oficio español. Si defendía la práctica de las condenas fundamentadas en testigos singulares, ¿cómo podía considerar, asimismo, justificado el procedimiento contrario, es decir, el que seguían los tribunales españoles? Resulta interesante reflexionar sobre este punto, porque, frente a quienes –defensores de los *cristãos-novos* o partidarios de una modificación de los usos y prácticas inquisitoriales– pretendían demostrar la irregularidad del procedimiento inquisitorial portugués mediante la comparación con el español o el romano, los teóricos y juristas que mantenían la legalidad de la práctica lusa argumentaban que, en este problema, existían varias opiniones «probables» y que en Portugal concurrían razones particulares que hacían imprescindible el empleo de testigos singulares.

Ahora bien, por muchos alegatos o pareceres que el *Conselho Geral* enviase al monarca, la Inquisición portuguesa disponía de un arma más eficaz que estos papeles con la que hacer frente a las intromisiones del poder real. Frente a las disposiciones ordenadas por el decreto del 13 de marzo de 1628, el Santo Oficio recurrió, simplemente, a la resistencia pasiva. Es decir, se negó a cumplir lo decretado por el monarca y justificó su actitud con el argumento de que sólo el papa tenía jurisdicción para modificar el procedimiento inquisitorial. Así, la Inquisición alegó que sólo podría introducir las modificaciones dispuestas por Felipe IV si tenía para ello orden expresa del papa. De sobra sabían los inquisidores que «a reposta quando he proporcionada e envolve dilação se reputta por meio mais eficaz pera impedir estes decretos»<sup>69</sup>.

La dilación, desde luego, resultó eficaz, pues ni el monarca logró que el Santo Oficio ejecutase las disposiciones ordenadas ni la Inquisición modificó su procedimiento. Felipe IV declaró finalmente que no deseaba restringir las prerrogativas y facultades del Santo Oficio portugués y éste continuó procediendo como antes. No sin razón podía decir ahora el colector apostólico en Lisboa:

«Questi singori hanno la causa per terminata in tutto a favore del Santo Officio e cominciano a procedere liberamente come prima senza guardare più l'ordine del Re»<sup>70</sup>.

## CONCLUSIÓN

Durante el período filipino, la Inquisición fue un asunto continuamente debatido tanto en Roma como en Madrid. La Corona intentó en varias ocasiones introducir algunos cambios en la práctica inquisitorial a fin de que cesasen las

<sup>69</sup> ANTT. CGSO. Maço 12. N. 13. Fol. 3v.

<sup>70</sup> ASV. Segreteria di Stato. Portogallo. N. 17. Fols. 307r-307v: Carta del colector Lorenzo Trama-llo del 13 de mayo de 1628.

críticas de los *cristãos-novos*. Así ocurrió, por ejemplo, a principios del siglo XVII y en la década de 1620. Pero la Inquisición portuguesa siempre se mostró reacia a permitir que autoridades y poderes externos modificasen su estilo o práctica procesal. Por ello, los cambios propuestos por los *cristãos-novos* y las medidas reales tendentes a llevarlos a la práctica quedaron en meros intentos. El Santo Oficio prefirió su propia reforma interna, sustituyendo el antiguo *Regimento* de 1554, aprobado por el cardenal-infante D. Henrique, por los nuevos *Regimentos* de 1613, ordenado por el *inquisidor-geral* D. Pedro de Castilho, y el de 1640, promulgado por D. Francisco de Castro.

El 1 de diciembre de 1640, mientras los llamados *quarenta fidalgos* proclamaban rey de Portugal a don João, duque de Bragança, entraba en vigor el nuevo *Regimento* del Santo Oficio portugués, aprobado por D. Francisco de Castro el 22 de octubre de ese mismo año<sup>71</sup>. Los *cristãos-novos* no abandonaron la lucha y con la *Restauração* se abrirán diferentes posibilidades para ellos bajo el régimen Bragança. Nuevos tiempos requerían nuevas tácticas para hacer frente al sagrado tribunal; los anhelos de los perseguidos serían los mismos, pero el discurso, en parte, cambiaría. Ya nadie volvería a pedir «che si riduca al modo di procedere di Castiglia»<sup>72</sup>.

---

<sup>71</sup> Rafael VALLADARES, *A Independência de Portugal. Guerra e Restauração. 1640-1680*, Lisboa, A Esfera dos Livros, 2006, p. 290.

<sup>72</sup> ASV. Segreteria di Stato. Portogallo. N. 17. Fols. 268r-268v: Carta del colector Lorenzo Trama-llo del 5 de febrero de 1628.